El gobierno español denunció espionaje a los teléfonos del presidente y una ministra

El Gobierno español presentó una denuncia ante la justicia en la que asegura que los teléfonos celulares del presidente, Pedro Sánchez, y su ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron objeto de escuchas «ilegales» y «externas» a través del programa informático israelí Pegasus, intromisión que permitió el robo de «gran cantidad de información».

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional -un tribunal español que tiene jurisdicción en todo el territorio nacional- , las intrusiones se produjeron en mayo y junio de 2021, en el teléfono móvil de Sánchez, y en esta última fecha en el de Robles.

Los piratas informáticos extrajeron del teléfono del jefe del Gobierno una enorme cantidad de información: 2,6 gigas en la primera intrusión; y 130 megabites, en la segunda, mientras en el aparto de la titular de Defensa el robo fue menor: 9 megas, informó la agencia de noticias AFP.

El Gobierno desconoce cuál fue la información robada y su grado de sensibilidad, pero se

trata, en ambos casos, de las líneas institucionales, no privadas.

«No son suposiciones», declaró, durante una conferencia de prensa convocada con carácter urgente, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que habló de «hechos de enorme gravedad» ocurridos en 2021.

«Tenemos la absoluta seguridad de que se trata de un ataque externo (…) porque en España, en una democracia como la nuestra, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial», indicó Bolaños.

«En este caso, no se ha producido ninguna de las dos circunstancias», agregó. «Por eso tenemos la seguridad, no tenemos ninguna duda de que es una infección, es una intervención que es externa», subrayó el ministro que no precisó si las autoridades españolas manejan algún indicio sobre quién puede estar detrás de esta intervención ni de si piensan en algún país extranjero.

«Cuando hablamos de que es una intrusión externa, lo que queremos decir es que es ajena a los organismos estatales y que no cuenta con autorización judicial», precisó.

Sánchez anunció que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) abriría una investigación interna y se comprometió a «rendir cuentas».

Líderes independentistas catalanes, calificaron la respuesta del ejecutivo como «insuficiente» y cuestionaron la conveniencia de estas revelaciones.

«Cuando el espionaje masivo es contra las instituciones catalanas y el independentismo, silencio y excusas. Hoy, todo son prisas. Hay que asumir responsabilidades ya», dijo el presidente regional catalán, Pere Aragonès, en su cuenta de Twitter.

«La doble vara de medir es evidente. Contra el independentismo, todo vale», agregó.

Esta crisis tiene una dimensión muy seria para el Gobierno minoritario de izquierda de Sánchez, que necesita el apoyo en el Parlamento de la formación de Aragonès para mantenerse en el poder hasta agotar la legislatura, a final de 2023.

«El Gobierno español es el único responsable de este caso de espionaje, sea por acción o por omisión», criticó la portavoz del ejecutivo regional catalán, Patricia Plaja, que volvió a reclamar «una investigación profunda, pública, independiente» sobre el caso.

Figura de la línea dura del independentismo, la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, fue más allá y se preguntó si el gobierno estaba realizando «una maniobra para pasar de verdugos a víctimas». «No cuela», lanzó en Twitter.

Concebido por la empresa israelí NSO, el software Pegasus permite acceder en cuanto se instala en un celular a los servicios de mensajería y a los datos, además de activar el aparato a distancia para poder captar imágenes o sonido.

NSO siempre aseguró que solo vende Pegasus a Estados y que estas operaciones deben tener antes el visto bueno de las autoridades israelíes.

Según la ONG Amnistía Internacional, este software podría haberse usado para piratear hasta 50.000 teléfonos móviles en el mundo.

Estas últimas revelaciones llegan en plena agitación política en España, donde el Gobierno central de Sánchez lleva días en tensión con los independentistas catalanes, que acusan al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de haberlos espiado.

El caso explotó el 18 de abril, cuando Citizen Lab, un proyecto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, hizo público un informe que identificaba a más de 60 personas de la órbita independentista catalana que habrían tenido sus teléfonos móviles infectados entre 2017 y 2020 con el software de espionaje israelí Pegasus.